

“Historia y precedente legal de las prácticas de detención y registro de peatones”

[. . .] Durante más de 50 años, los departamentos de policía de los Estados Unidos han estado experimentando con diferentes métodos de participación comunitaria¹ para mejorar los esfuerzos de prevención y control del delito. Los agentes de patrulla a pie han tenido un papel clave en estas estrategias, proporcionando el vínculo más directo entre las fuerzas del orden y el público². La investigación ha demostrado que los agentes de patrulla son un componente integral de una estrategia de policía comunitaria exitosa, que produce impactos positivos sobre el crimen y las percepciones de seguridad de la comunidad (J. A. Greene 1987; Kelling et al. 1981; Trojanowicz 1983; Walker y Katz 2002). Pero la investigación también sugiere que cuando los oficiales interactúan con los ciudadanos de una manera agresiva o aparentemente arbitraria³, pueden tener un impacto negativo en las relaciones entre la policía y la comunidad, amenazando⁴ la confianza y el respeto del público por la aplicación de la ley (J. A. Greene 1987). Las actitudes de los residentes hacia la aplicación de la ley a menudo se basan en sus propias experiencias al presenciar, escuchar o ser parte⁵ de interacciones con los oficiales de patrulla. Uno de los contextos más comunes para estas experiencias es cuando los agentes detienen, y potencialmente interrogan y registran⁶ a las personas en las comunidades que están patrullando. Las actitudes de los residentes hacia la aplicación de la ley son relevantes para la policía porque la cooperación ciudadana es imperativa en el proceso de investigación de delitos⁷; La capacidad de una agencia de policía para resolver delitos y realizar⁸ arrestos depende de la confianza del público en la aplicación de la ley (Police Executive Research Forum 2009).

Los precedentes legales apoyan⁹ la detención y registro de peatones con fines de investigación y control de delitos. En EE.UU. Caso de la Corte Suprema Terry v. Ohio, la opinión de la mayoría confirmó el derecho¹⁰ de un oficial de policía a detener a una persona en la calle si el oficial tiene una “sospecha razonable” de que la persona está involucrada¹¹ en una actividad criminal. Además, el Tribunal sostuvo que un oficial puede registrar al peatón, siempre que el oficial tenga una sospecha razonable de que el individuo porta un arma¹²; después de esta decisión judicial, estas paradas se denominaron comúnmente “paradas de Terry”. Varios casos posteriores de la Corte Suprema ampliaron aún más la definición de sospecha razonable¹³ y la autoridad de los agentes de policía para realizar detenciones, cacheos y registros de peatones. Adams v. Williams amplió los criterios¹⁴ de sospecha razonable para las

¹ community engagement

² providing the most direct link between law enforcement and the public

³ in a seemingly aggressive and arbitrary way

⁴ threatening

⁵ their own experiences witnessing, hearing about, or being part of interactions with patrol officers

⁶ search

⁷ citizen cooperation is imperative in the process of investigating crimes

⁸ ‘carry out’

⁹ Legal precedents support

¹⁰ the majority opinion upheld a police officer’s right

¹¹ involved

¹² may then frisk the pedestrian, provided the officer has a reasonable suspicion that the individual is carrying a weapon

¹³ expanded the definition of reasonable suspicion

¹⁴ ‘increased the criteria’

detenciones más allá de los hechos articulables observados por un oficial para incluir pistas de informantes conocidos¹⁵, y sostuvo que la corroboración de estas pistas por parte del oficial al detener al peatón podría constituir una sospecha razonable de un cacheo. Alabama v. White sostuvo que las denuncias anónimas (a diferencia de las denuncias de informantes conocidos) pueden cumplir los criterios de sospecha razonable si se consideran junto con pruebas u observaciones que corroboran los agentes. Además, EE. UU. v. Sokolow sentó el precedente para que los oficiales detuvieran a los peatones basándose en perfiles sospechosos¹⁶ siempre que el oficial pueda articular hechos que sugieran que un peatón encaja en el perfil¹⁷, incluidos factores probabilísticos y pistas no conductuales¹⁸; en este caso, llevar una gran cantidad de dinero en efectivo y usar ropa y parafernalia que parecían consistentes con la impresión de los oficiales de la ropa que usaría un narcotraficante¹⁹. Illinois v. Wardlow amplió aún más los criterios de sospecha razonable para incluir a un peatón que huye de la policía sin contacto previo con los oficiales de investigación. La Corte Suprema además afirmó el poder de los estados para promulgar leyes que requieran que los civiles proporcionen sus nombres a los oficiales que realizan detenciones de Terry²⁰.

En otro caso relacionado, la Corte Suprema también aclaró el poder de la policía para realizar registros e incautaciones posteriores a las paradas de peatones²¹, sosteniendo que los registros utilizados para identificar armas potenciales se limitan a áreas en las que un arma puede estar escondida²², pero pueden incluir áreas además del cuerpo de un peatón, como bolsas y otras pertenencias. Además, el tribunal dictaminó²³ más tarde que el contrabando, además de armas, como drogas y parafernalia relacionada con las drogas, confiscado en el curso de un cacheo puede servir como base para cargos criminales, siempre y cuando ese contrabando se encuentre inadvertidamente durante una búsqueda limitada de armas.²⁴ Finalmente, la Corte Suprema se pronunció sobre la cuestión de cuánto tiempo pueden durar las paradas de Terry en EE. UU. v. Sharpe, sosteniendo²⁵ que no hay un límite de tiempo máximo en el que los agentes pueden detener a los peatones²⁶ en el curso de una parada de Terry, porque los agentes tienen el poder de investigar la sospecha razonable²⁷ que sirvió como base para la parada con diligencia.

¹⁵ tips from known informants

¹⁶ set the precedent for officers to stop pedestrians based on suspect profiles

¹⁷ fits in the profile

¹⁸ including probabilistic factors and nonbehavioral clues

¹⁹ wearing clothing and paraphernalia that seemed consistent with officers' impression of clothing a drug runner would wear

²⁰ The Supreme Court additionally affirmed the power of states to enact laws requiring that civilians provide their names to officers conducting Terry stops

²¹ conduct searches and seizures subsequent to pedestrian stops

²² hidden

²³ ruled

²⁴ as long as that contraband was found inadvertently during a limited search for weapons

²⁵ ruling

²⁶ pedestrians

²⁷ reasonable suspicion

A pesar del precedente legal sustancial que respalda el uso de las autoridades policiales de paradas y registros para peatones²⁸, Skogan y Meares (2004) encontraron que los oficiales no necesariamente son conscientes de las limitaciones de esta práctica, ni las cumplen rutinariamente²⁹; Los oficiales tampoco siempre cumplen con los criterios de un registro legal. Por ejemplo, aplicando el estándar de Terry v. Ohio, Skogan y Frydl (2004) concluyeron que una parte alarmante de las paradas no cumplen con los estándares constitucionales³⁰, y el 14 por ciento de las paradas documentadas en la ciudad de Nueva York no cumplen con el estándar³¹ original de sospecha razonable establecido por el tribunal en la sentencia de 1968. Otro estudio encontró que hasta el 29,7 por ciento de los registros³² de peatones en una ciudad estadounidense de tamaño medio eran inconstitucionales (Gould y Mastrofski 2004). En los últimos años, las prácticas de detención y registro han dado lugar a una serie de demandas³³. En la ciudad de Nueva York, se presentó una demanda colectiva federal³⁴ contra la ciudad con el argumento de que la política de detención, interrogatorio y registro del departamento de policía era inconstitucional. La Unión de Libertades Civiles de Nueva York también demandó al departamento por mantener una base de datos³⁵ con nombres de las personas que han sido detenidas, argumentando que fue una invasión indebida de la privacidad³⁶; sin embargo, este caso fue desestimado³⁷. En Filadelfia, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Pensilvania argumentó que la policía estaba deteniendo a negros y latinos sin causa y que la práctica tenía prejuicios raciales³⁸. El caso se resolvió en junio de 2011; la ciudad negó irregularidades y rechazó las reclamaciones de los demandantes³⁹, pero aceptó un decreto de consentimiento⁴⁰ en el que un auditor externo revisaría periódicamente los datos de detención y registro de la ciudad. El grado en que existen estas demandas a pesar de los amplios precedentes legales que toleran las prácticas de detención y registro sugieren que es la forma en que la policía realiza detenciones y registros⁴¹ lo que genera preocupación entre los miembros de la comunidad y los defensores de las libertades civiles⁴².

²⁸ supports law enforcement's use of pedestrian stops and searches

²⁹ are not necessarily aware of, nor do they routinely comply with

³⁰ an alarming share of stops do not meet constitutional standards

³¹ don't meet the standard

³² searches

³³ have prompted a number of lawsuits.

³⁴ a federal class-action lawsuit

³⁵ data base

³⁶ undue invasion of privacy

³⁷ dismissed

³⁸ the practice was racially biased

³⁹ rejected claims by plaintiffs

⁴⁰ consent decree-- A consent decree is **an agreement or settlement that resolves a dispute between two parties without admission of guilt** (in a criminal case) or liability (in a civil case), and most often refers to such a type of settlement in the United States

⁴¹ manner in which police engage in stops and searches

⁴² civil liberties advocates